

A DIEZ AÑOS DEL CONFLICTO POR LA "RESOLUCIÓN 125"

Eduardo Romano
Estudiante Lic. en Historia - UNQ
Investigador en CEAR (Centro de estudios de la Argentina Rural)

Marzo 2018

El 11 de marzo de 2008 desde el Ministerio de Economía se anunció la sanción de la Resolución que establecía un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones sujetando su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales, de modo que, a mayor aumento del precio internacional, menor fuera su impacto en los precios internos.

Al día siguiente del anuncio las principales entidades agropecuarias manifestaron su radicalizada oposición al proyecto debido a que esta resolución significaba desembolsar una cantidad de recursos de los sectores con mayor concentración de riqueza del país. Esto significó un conflicto a grandes escalas en los aspectos políticos y sociales, la historia que comenzaba a escribirse provocó un quiebre en los ámbitos mencionados.

La lucha entre una administración gubernamental cuyo objetivo de distribución igualitaria de recursos económicos en beneficio de las mayorías y uno de los sectores de mayor concentración de riqueza del territorio nacional (por ejemplo de acuerdo a uno de los datos más importantes del Censo agropecuario en 2002 138.328 establecimientos agropecuarios; ya sea familias o empresas en el rubro del agro son dueños de 73,7 millones de hectáreas en conjunto o los grandes establecimientos sojeros como los Grobo, propiedad de Gustavo Grobocopatel cuya fortuna asciende a los 1200 millones de dólares y Adecoagro del magnate George Soros dueños), estaba en marcha y tendría en vilo al país durante 125 días lo que denominare un conflicto total.

Es imposible no contextualizar sobre la distribución de la tierra en Argentina como también el proceso de cotización que en 2007 alcanzó el 53 % de la tierra cultivable, para entender una posición radicalizada que es histórica, que posee raíces en el pasado más reciente de la historia de nuestro país. Uno de los mayores lobistas contra la resolución 125 fue la S.R.A cuyo dirigente histórico Hugo Biolcatti (este organismo es uno de los principales acusados por complicidad civil durante el último golpe Cívico-militar de 1976) comenzaba a tomar una trascendencia considerable en los medios de comunicación junto con su presidente Luciano Miguenz, Mario Llambías de Confederaciones Rurales Argentinas, Eduardo Buzzi de Federación Agraria Argentina y Carlos Garetto de CONINAGRO.

Con la intención de seguir el hilo conductor de esta nota sobre las razones de denominar un conflicto total de intereses entre un gobierno que por primera vez en décadas estaba decidido a indagar a la sociedad sobre la puja distributiva y un sector antagónico a la visión de distribuir en beneficio de las mayorías populares, los métodos utilizados consistieron en un lockout patronal que comenzó con un cierre comercial que tenía por objetivo impedir que funcionen los mercados de alimentos pero sin que las empresas rurales suspendan sus actividades productivas.

Sin embargo, estos métodos se radicalizaron hasta el bloqueo total de rutas, puentes y puertos, movilizaciones rurales, suspensión en la cadena de pagos, ubicación de piquetes terratenientes en diversos puntos estratégicos del país, que impedían el transporte

de los alimentos imprescindibles en la alimentación esencial de la población.

Pronto la disputa entre estos dos sujetos se tornó política ya no se trataba de una discusión sobre economía traducida en una puja distributiva. “Nos pintamos la cara para una guerra, nos hartamos de un gobierno que nos ningunea y nos humilla” palabras desafiantes de un ruralista de la localidad de Armstrong, Santa Fe o las del propio Eduardo Buzzi; “hemos demostrado que se puede desabastecer.

Las consecuencias de este lockout patronal fueron nefastas con aumentos del 100 % en el precio de los alimentos, la pérdida de 6 millones de litros de leche, cuatro millones de kilos de frutas y verduras y el sacrificio de un millón y medio de aves.

Ni siquiera las mesas de dialogo consiguieron apelar a la razón de las principales entidades agropecuarias, ni las propuestas económicas realizadas, por ejemplo, el gobierno propuso destinar 1.500 millones de pesos (500 millones de dólares) para compensar a los pequeños y medianos empresarios, así como a quienes se encontraran más lejos de los puertos, y fomentar la producción lechera y ganadera, amenazada por la expansión de la soja. La propuesta fue rechazada de manera tajante por las entidades agropecuarias y el lockout continuaría en pie.

La decisión de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner de enviar el proyecto al parlamento significo una lucha ahora en el plano político. La violencia que sufriera el diputado Agustín Rossi del bloque del frente para la victoria al ser increpado con intentos de golpes por parte de ruralistas santafesinos eran producto de una disputa que ya no conocía límites, en palabras de la familia De Angeli al exclamar; “Se va, esto se termina” o una de sus mayores lobistas parlamentarias Elisa Carrió al afirmar que este conflicto se resuelve con el dialogo o la ida del poder, si tenemos en cuenta que el gobierno de Cristina Kirchner fue electo hacia 6 meses, los fantasmas de destitución tomaban cada vez mayor relevancia en la política de 2008.

La aprobación del proyecto en la cámara de diputados, pero que sufriría un revés en el senado a través del desempate de Julio Cobos exacerbaron los aires de renuncia a través de los principales medios de comunicación como Clarín y La Nación, el 18 de julio de 2008 luego de la maratónica votación cuyo desenlace culmino con una derrota política para el oficialismo en el senado por 38 votos en contra los 37 que votaron afirmativamente a las 4.35 de la madrugada.

Transcurrió una década de la que fuese una de las mayores disputas político-económico-social de la historia reciente de nuestro país, si bien la resolución del conflicto derivó en una derrota política para el gobierno, un nuevo capítulo se escribiría en cuanto a la lucha entre intereses completamente antagónicos, un gobierno que tenía como prioridad la marcha hacia una distribución equitativa del ingreso y un sector que claramente no deseaba ceder parte de su capital en favor de las mayorías.

El 11 de marzo de 2008 tenía 23 años y fui un claro espectador de lo que millones de hombres y mujeres de mi edad no conocíamos hasta el momento si bien vivimos la fatídica experiencia de 2001 en el derrumbe institucional, presenciarnos en conflicto de intereses del que bisabuelos, abuelos, padres nos dieron cuenta en el ciclo económico y social más relevante de la historia de nuestro país 1946-1955.